

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 10° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-15400-2018  
CARATULADO : JIMÉNEZ/FISCO DE CHILE, CONSEJO DE  
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, veintitrés de Julio de dos mil veinte  
**VISTOS.**

A folio 1, comparece doña Lorna Mulchi Echeverría, Abogado, en representación convencional de don Jorge Eduardo Sepúlveda Vergara y de doña Jacqueline Ivette Jiménez Martínez, empleado y dueña de casa respectivamente; todos domiciliados en Paseo Huérfanos N° 1294, oficina 31, comuna de Santiago, quien interpone demanda civil de indemnización de perjuicios extracontractuales en juicio de hacienda en contra de Carabineros de Chile, organismo policial estatal del giro de su denominación, representada por su Director General don Hermes Soto Isla, funcionario público, ambos domiciliados en calle Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1196, comuna de Santiago, Región Metropolitana, y en forma solidaria en contra del Fisco de Chile, representado judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado, organismo público del giro de su denominación, ambos representados por su Presidente doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, todos domiciliados en calle Agustinas 1687, Santiago.

Antecedentes de hecho de la responsabilidad alegada:

Funda su demanda en con fecha 06 de junio de 2014, aproximadamente a las 6:50 A.M, al interior de la 17° Comisaria de Carabineros de Chile de Las Condes, se reúne el personal de Servicio de Tránsito de Colegios y Primer Turno Población, quienes formaban con la finalidad de preparar su servicio, recibiendo de manos de la Sargento 2° de Carabineros doña Lorena Villalón Vásquez, armamento y equipo fiscal.

Indica que la Sargento Lorena Villalón procede a hacer entrega del cargo fiscal de "Tránsito" a los Carabineros Yonatan Marin Saldivia, Felipe Kunstmann Kunstmann y Héctor Sepúlveda Jiménez, consistente en cinturón operativo, un revolver calibre 38 con 06 cartucho y un chaleco reflectante y a los funcionarios del turno "Población" Sargento 2° Aguilera, Cabo 1° Palma y Carabineros Catalán y Lara, entrega cinturón operativo y revolver calibre 38, más 12 cartuchos y unas pulseras de seguridad.

Relata que al momento de entregar el armamento, la Sargento Villalón hace presente a los funcionarios que deben esperar a los jefes de turno para proceder a la carga de sus armas de servicio, quedando estos sin supervisión de oficial alguno en la zona de carga y descarga.



Foja: 1

Expone que mientras se desarrollaba el proceso de entrega de armamento, llega a la zona de carga y descarga la Subteniente Francisca Andrea Díaz Lizama, quien en esa fecha estaba en la dotación de la Escuela de Carabineros realizando su práctica profesional en la 17° Comisaria de Carabineros de Las Tranqueras. Que cuando ella llega a la zona de carga y descarga de Armamentos, se da cuenta que se encuentran en el área cinco funcionarios correspondientes al Servicio de Tránsito y además otro personal dispuesto para el primer turno de servicios en la Población. Que al formarlos detecta que faltan algunos Carabineros, entre ellos el chofer, razón por la cual solicita al Carabinero Marín se dirija a las habitaciones para apurarlos. Que en ese momento hace abandono de la habitación de carga y descarga, dirigiéndose a la sala del Suboficial interno Sargento 2° Lorena Villalón, para obtener la planilla con el personal de Servicio.

Expresa que encontrándose los Carabineros del turno tránsito y primer turno servicio población sin supervisión alguna, ya que la Suboficial a cargo había hecho abandono del lugar para dirigirse a la sala de Suboficial Interno, se escucha un disparo en la zona de carga y descarga, por lo que la suboficial Díaz, retorna a dicha zona donde se percata que el Carabinero Catalán se encuentra con una herida en el rostro, sangrando abundantemente. Que se prestan los primeros auxilios al Carabinero Catalán, deteniendo la hemorragia y procediendo a su traslado inmediato al Hospital de la FACH.

Precisa que mientras acontecía lo anterior, se escucha un segundo disparo, siendo el afectado el Carabineros Héctor Sepúlveda Jiménez, quien a diferencia del primero no recibe por mucho tiempo ningún tipo de ayuda, ya que a pesar de la gravedad de sus lesiones, no es socorrido por ningún funcionario.

Sostiene que los funcionarios que estaban ese día en la Comisaria declaran que, vieron el cuerpo del Carabinero Sepúlveda sobre el cajón de Arena, con gran cantidad de sangre saliendo desde su cabeza, pero en vez de verificar su estado y signos vitales, optaron inexplicablemente por otras acciones:

a) Suboficial Francisca Díaz salió a pedir ayuda a la telefonista e informar de lo ocurrido.

b) Sargento 2° Lorena Villalón continuó caminando con el Carabinero Catalán hasta la salida, dejándolo arriba de un vehículo policial en el cual fue trasladado hasta el hospital.

c) Felipe Kunstmann Kunstmann señala que sacó del lugar a una Carabinero que estaba muy afectada por lo sucedido, llevándola hasta la guardia de imputados, regresando al lugar de los hechos a los pocos minutos después.

d) Jaime Aguilera Beecher señala que “cuando regresaba al lugar escuché un segundo disparo, por lo que al acercarme pude ver que el Carabinero Sepúlveda, se hallaba tendido sobre el cajón de arena para preparación de armamento con un impacto a nivel de la cabeza ya que sangraba profundamente”.



Foja: 1

e) Gonzalo Alejandro Bañares Ruiz señala “debido a que era la primera vez que me sucedía algo así y dado lo impactante de la situación, no pude reaccionar ni prestar ayuda a ninguno de los colegas heridos”.

f) Manuel Palma García señala que continuó avanzando con el Carabinero Catalán, junto con solicitar ayuda para Sepúlveda, a fin de que le prestaran los primeros auxilios.

g) Hernán Ignacio Mendoza Recaberren, Sargento 2°, señala que por instrucciones del Sargento 2° José Gómez Reyes, tomó fotografías para “fijar el sitio del suceso” mediante su celular, para luego ser enviadas al Sargento 2° John Torreblanca, quien a su vez las envió al Subteniente Maximiliano Pino de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros mediante mensajes de Whatsapp.

Concluye que estas declaraciones demuestran que pasaron largos minutos entre que el Carabinero Sepúlveda no recibió ningún tipo de asistencia, estando tendido en la caja de arena.

Señala que más tarde ingresa a la sala el Sargento Quelin, quién había trasladado previamente al Carabinero Catalán, quién declara que en compañía del Sargento Gómez, constataron que aún Sepúlveda tenía pulso, por lo que con una frazada procedieron a trasladarlo hasta la salida y posteriormente hasta el carro policial, en que finalmente lo trasladaron hasta el Hospital FACH. Que mientras en el Hospital de la FACH se atendía en la sala de reanimación al Carabinero Catalán (ingresado a urgencia a las 7:12 AM, según ficha clínica), debió ser sacado de dicha unidad a las 7:26 AM y trasladado al box 7 ante la llegada de otro paciente al recuperador, ya que venía en peores condiciones. Que este nuevo paciente era Héctor Sepúlveda Jiménez, quien de acuerdo a la ficha clínica del Hospital de la FACH ingresó a las 7:24 AM en urgencia, siendo pasado de inmediato a reanimador por herida a bala facial, con mal estado general, comprometido hemodinámicamente, se constata ritmo de paro y se inicia RCP; a las 7:35 se declara su fallecimiento.

Hace presente que respecto a los hechos relatados se tramitó un sumario interno y se abrió causa ante Justicia Militar, quedando radicada ante la Cuarta Fiscalía Militar de Santiago, causa rol 1000-2014. Que en ambos procesos, surgieron dudas respecto a cómo acontecieron los hechos, ya que existen muchas contradicciones de los testigos que presenciaron los hechos, tanto respecto de los tiempos entre el primer y segundo disparo, las razones para supuestamente auto inferirse un disparo el Carabinero Sepúlveda, errores informe Servicio Médico Legal, etc.

Asevera que lo que sí está claro es que:

a) Ningún oficial estaba a cargo de la maniobra de carga y descarga de Armamento al momento de ocurrir los hechos.



Foja: 1

b) La Subteniente Francisca Díaz Lizama no se encontraba en la zona de carga y descarga, al momento en que se produjeron los hechos.

c) La Subteniente Francisca Díaz Lizama estaba realizando su practica en el 17º Comisaria de Las Condes.

d) No se prestó Asistencia inmediata al Carabinero Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez, quien ingreso al Hospital FACH 12 minutos después que el Carabinero Catalán, siendo que éste último sólo tenía una herida de menor entidad, mientras que el primero había sufrido una herida que contemplaba riesgo vital.

e) Se prestó asistencia inmediata al Carabinero Julio Francisco Catalán Sepúlveda, quien fue trasladado de inmediato al Hospital FACH.

Plantea que se ha configurado por los entes fiscales demandados un hecho ilícito civil de falta de servicio, que ha causado tremendos daños patrimoniales y extramatrimoniales a sus representados, que menester será que se ordenen indemnizar.

Antecedentes de derecho de la responsabilidad alegada y daños alegados:

Cita al efecto los artículos 6 y 38 de la Constitución política de la República; artículos 1, 3, 4 y 42 de la Ley 18.575. Sostiene que nuestro derecho la responsabilidad administrativa es de carácter objetivo.

En cuanto al daño moral, afirma que ante el dolor por la pérdida de su hijo sus representados debieron someterse a tratamiento con siquiatria, sicólogo, terapia de grupo, ya que no pudieron aceptar el fallecimiento de su hijo.

Indica que doña Jacqueline sufre de una depresión severa, con ánimo depresivo, labilidad emocional, impulsividad, pena y malestar intensos asociados al fallecimiento de su hijo, dificultad para aceptar la muerte del familiar, desconfianza y paranoia, escaso auto cuidado y conductas de riesgos y alteración de vida laboral y familiar; tiene un trastorno de duelo complejo persistente asociado a la muerte de su hijo, por el cual mantiene control sicológico y psiquiátrico en PRAIS Araucanía Norte, donde trabajan con el objeto de conseguir una evolución positiva, pero según lo señalado por ellos mismos “de difícil resolución si no se clarifica el fallecimiento, pudiendo esperar empeoramiento en su diabetes y reaparición constante de cuadros depresivos”.

Señala que don Jorge también padece un cuadro Depresivo Mayor Severo secundario a duelo por muerte de su hijo, quien no asiste a los tratamientos con la regularidad de doña Jacqueline, por complicaciones en su salud, producto de la aparición de Cáncer en Parótida Izquierda, realizándose una parotidectomía izquierda radical ampliada con disección cervical izquierda modificada tipo III y reanimación facial estática y reconstrucción con colgajo microquirúrgico.



Foja: 1

Afirma que los hechos denunciados han provocado un enorme daño moral. Que por la evidente falta de servicio de la demandada falleció su hijo, ya que si se hubieran tomado las providencias necesarias el estaría aún con vida.

Opina que estamos, en la especie, frente a un caso de "daño moral evidente", que es "aquel daño moral que se demuestra sin necesidad de prueba, por la sola ocurrencia del hecho ilícito".

Sostiene que además de no aclararse las causas del fallecimiento del hijo de las demandantes, la Institución por Resolución N° 7 de fecha 6 de junio de 2014 dispone la "baja de las Filas de la Institución, a contar de las 00:00 horas del día 07 de junio de 2014, por circunstancias obligadas, por haber fallecido el día 06 de junio de 2014, producto de traumatismo encefalocraneano por proyectil balístico".

Concluyen que todos los hechos relatados han significado para sus mandantes un grave daño moral, que solicita se ordene indemnizar en la suma de \$300.000.000 a cada uno de ellos.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de mayor cuantía en contra de la Carabineros de Chile, organismo policial estatal del giro de su denominación, representada por su Director General don Hermes Soto Isla y en forma solidaria en contra del Fisco de Chile, representado judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado, organismo público del giro de su denominación, ambos representados por su Presidente doña María Eugenia Manaud Tapia, ambos ya individualizados, y en sentencia definitiva, condenar a los demandados a las sumas y prestaciones que se solicitan en las peticiones concretas formuladas o aquellas que SS, estime en derecho y justicia, de acuerdo al mérito de autos; con costas.

A folio 6, consta la notificación del demandado Consejo de Defensa del Estado (Fisco de Chile), efectuada con fecha 25 de junio del año 2018.

A folio 7, consta la notificación del demandado Carabineros de Chile, efectuada con fecha 25 de junio del año 2018.

A folio 11, la demandada Fisco de Chile/Consejo de Defensa del Estado (Fisco de Chile) **contestó la demanda**, solicitando su rechazo con costas.

Señalan que el día 06 de junio de 2014, a las 06:50 horas, el personal de Carabineros de Chile destinado al servicio extraordinario tránsito colegios y personal de servicio primer turno en la población, de la 17ª Comisaría de Carabineros "Las Condes", formaban con la finalidad de preparar el servicio, procediendo a retirar armamento en la sala a cargo del Suboficial de Régimen Interno. Que una vez formado el personal en la zona de seguridad para realizar la carga y descarga, la Subteniente Srta. Francisca Díaz Lizama, quien se encontraba a cargo del servicio extraordinario tránsito colegios, giró su



Foja: 1

cuerpo hacia la oficina del Suboficial Interno, con la finalidad de informar que faltaban tres carabineros al servicio, momento en el cual escuchó un disparo y al mirar al sector de dónde provenía, se pudo percatar que el carabinero Julio Catalán Sepúlveda, quien se encontraba de servicio primer turno en la población, mantenía una lesión por herida a bala en su rostro que le producía un gran sangramiento, procediendo de inmediato a socorrerlo, ya que se estaba desvaneciendo, disponiendo – la Subteniente a cargo - que el resto del personal se apartara para prestar los primeros auxilios.

Indica que una vez que impartió las instrucciones referidas, y con la conmoción del suceso relatado, se produjo un segundo disparo ejecutado por el ex-carabinero Héctor Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.), quien en esos momentos se encontraba de servicio extraordinario tránsito colegios, y que fue dirigido a su cabeza, en una acción del tipo suicida, lo que produjo su inmediata caída al suelo, a un costado de la caja de seguridad para realizar la carga y descarga del armamento.

Expone que a raíz de lo anterior, los funcionarios de carabineros que estaban en el lugar procedieron de inmediato a prestar auxilio a los dos carabineros mencionados, trasladándolos en vehículos policiales, hasta el Servicio de Urgencia del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, ubicado en Avenida Las Condes N° 8631, nosocomio donde fueron atendidos, falleciendo el carabinero Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.), a las 07:35 horas. Anota que el establecimiento hospitalario se encuentra a 5 minutos del lugar donde ocurrieron los hechos, a la hora de los sucesos.

Apunta que conforme a las declaraciones de los testigos oculares del suceso, cuando el carabinero Héctor Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.) cargó su armamento de servicio en el lugar de seguridad (caja de arena), provocó un disparo que lesionó al carabinero Julio Francisco Catalán Sepúlveda en el rostro, ante lo cual, el ex-carabinero Héctor Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.), procedió a ubicar su revólver, marca Taurus, Serie N° EZ538116, a la altura de su boca, procediendo a auto inferirse un disparo, el que generó lesiones, que posteriormente le causaron la muerte en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile.

Precisa que el ex-carabinero Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.) mantenía su armamento de servicio, correspondiente a un Revólver marca Taurus calibre 38, serie Nro. EZ538116, de cargo fiscal de la 17ª Comisaría de Carabineros “Las Condes”.

Sostiene que los hechos descritos fueron investigados por Carabineros de Chile, investigación sumaria que concluye con el Dictamen N° 05867/2014/3/ de fecha 23 de diciembre de 2016, en el que se deja constancia que la causa de la muerte del carabinero Sepúlveda Jiménez fue causada por un traumatismo encéfalo craneano por proyectil balístico, de tipo suicida, y la trayectoria de la lesión era de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, y se establece que los hechos no ocurrieron en un acto propio del servicio.



Foja: 1

Informa que en paralelo, con fecha 06 de junio de 2014 se inició una investigación por la Cuarta Fiscalía Militar que instruyó el proceso Rol N° 31.953-14 seguido ante el Segundo Juzgado Militar, en el que se evacuó un informe de autopsia, y otro de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en que se interrogaron testigos; y en la cual el Fiscal Militar solicitó finalmente el sobreseimiento total y definitivo de la causa en razón de que las lesiones del carabinero Sepúlveda Jiménez eran del tipo suicida, y porque según el Informe del Servicio Médico Legal “aún con el auxilio del individuo hubiese fallecido”, solicitud que fue acogida por el Segundo Juzgado Militar por resolución de fecha 2 de octubre de 2017, y confirmada por la Corte Marcial por resolución de fecha 7 de febrero del 2018.

En cuanto al marco legal de la responsabilidad extracontractual del Estado, asevera que la responsabilidad de los órganos del estado no es de carácter objetivo.

Hace presente que en el caso de autos, por expresa disposición del artículo 21 de la ley 18.575, las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, quedan excluidas de la aplicación del artículo 42 de la Ley 18.575, lo que hace necesario determinar la normativa aplicable al caso concreto. Que dado que las respectivas leyes orgánicas de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, no regulan esta materia, corresponde recurrir al derecho común. Que el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en el Código Civil, título XXXV, denominado “De los delitos y cuasidelitos”, artículos 2.314 y siguientes, y de acuerdo a esas normas, la responsabilidad extracontractual es de carácter subjetiva, lo cual guarda relación con el artículo 42 de la Ley 18.575, que también contiene un sistema de responsabilidad subjetiva fundada en la “falta de servicio” (falta de servicio no es una responsabilidad objetiva).

Plantea que se está por tanto frente a una “falta de servicio” cuando el órgano público ha funcionado mal; cuando no ha funcionado, existiendo la obligación legal de hacerlo de modo que se produce un perjuicio por omisión; y cuando ha funcionado, pero en forma tardía. Que por consiguiente, para que pueda responsabilizarse al Estado por falta de servicio, es menester que el demandante pruebe que el órgano estatal no funcionó debiendo hacerlo, o que funcionó en forma deficiente o tardía; no basta la mera existencia del daño y su prueba. Que adicionalmente, la víctima del daño debe probar que existe un vínculo de causa a efecto entre la actividad o decisión administrativa y el daño alegado.

Resume que la responsabilidad por falta de servicio, plantea requisitos esenciales de procedencia de la responsabilidad estatal que merecen en este caso especial atención:

1) Que el acto u omisión que provoca daño provenga de entidad que tenga la calidad de “Órgano de la Administración”;

2) Que el daño lo haya causado el órgano “en el ejercicio de sus funciones”;



Foja: 1

3) Que exista culpa, entendiéndose por ésta, que “se omita el cuidado necesario o la diligencia que debe emplearse normalmente”;

4) Que exista relación de causalidad entre el hecho calificado de culposo y el daño que pretende se le indemnice.

A continuación opone la excepción de prescripción del artículo 2332 del Código Civil, solicitando que así sea declarada y, en consecuencia, rechazada la demanda. Que el artículo 2332 del Código Civil establece un plazo de prescripción extintiva de la acción que persigue la responsabilidad extracontractual de 4 años, plazo se cuenta desde la comisión del acto antijurídico doloso o culpable, por lo que el plazo de prescripción extintivo debe contarse desde el fallecimiento del Carabinero Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.), ocurrido el 6 de junio de 2014, con lo que el cuadrienio para deducir la acción indemnizatoria venció el 6 de junio del 2018, y como la demanda de autos se notificó el 25 de junio del 2018, su parte tiene derecho a oponer la excepción de la prescripción extintiva de la acción del art. 2332 del Código Civil, y solicitar el rechazo de la misma.

A continuación alega que no corresponde hacer efectiva la responsabilidad del Estado por “falta de servicio”, por tratarse de una acción suicida del ex carabinero Sepúlveda Jiménez. Que dada la naturaleza de los hechos descritos en el libelo, aparece de manifiesto que tal conducta corresponde a una falta personal del ex Carabinero Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.) a quien se le imputan actos respecto de los cuales el Estado no es ni puede ser responsable. Que el artículo 42 de la Ley 18.575 distingue entre “falta de servicio” y “falta personal”, y la interpretación de dicho artículo que han hecho los Tribunales Superiores de Justicia señalan que una excluye a la otra, salvo que la “falta personal sea “atingente al servicio”. Que la decisión del ex Carabinero Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.) entra en la órbita de aquellas actuaciones que suceden por una autodeterminación del autor, sin requerimiento ni necesidad del servicio policial, puesto que los móviles que lo indujeron a esa conductas obedecieron a un impulso propio y personal del sujeto, que nada tienen que ver con el ejercicio de su función policial, constituyen así una falta personalísima.

En cuanto a la alegación de demora en la prestación de atención médica al Carabinero Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.), antes de su deceso, señala que una vez producido el incidente, que debe situarse entre las 06:50 horas y las 07:00 horas del 06 de junio de 2014, el personal de Carabineros prestó auxilio a los dos Carabineros heridos de bala, señores Sepúlveda Jiménez y Catalán Sepúlveda, y fueron trasladados prontamente en el Radio Patrulla institucional al Servicio de Urgencia del Hospital Fach, ubicados en las cercanías del lugar Avenida Las Condes 8631, por el Sargento 2do. Carlos Quelin Obreque. Que la actuación del personal de Carabineros, el día del incidente, no puede calificarse de una “falta de servicio” al socorrer a los heridos, ya que pasado el shock inicial de ver mal heridos a dos de sus compañeros, se decide trasladarlos en un radio patrullas, sin esperar la llegada de la ambulancia, al Servicio de





Foja: 1

Urgencia del Hospital más cercano, trayecto que demora 5 minutos de ida y 5 de vuelta, donde ingresan primero el Carabinero Catalán Sepúlveda a las 07:12 AM, y posteriormente, el Carabinero Sepúlveda Jiménez a las 07:24 horas, constatándose la muerte de este último a las 07:35 horas de ese día 06 de junio de 2014.

A continuación reclama que tampoco cabe la imputación de responsabilidad del Estado por culpa o “falta de servicio”, porque no hay relación de causalidad entre el actuar de Carabineros y la muerte del Carabinero Sepúlveda Jiménez. Que la atención brindada por los funcionarios de Carabineros a su compañero Sepúlveda Jiménez, fue oportuna dentro de la situación imprevista en que se encontraron trasladándolo con vida a un establecimiento hospitalario, con una herida de bala en el cráneo auto infringida del tipo suicida. Que la gravedad de una herida en el cráneo, a consecuencia de un disparo producido en la propia boca de quien sostiene el arma, que destruye el cráneo, parte del cerebro y del cerebelo, lleva a cualquier observador a presumir la muerte del autor del disparo, independiente si esta se produce de inmediato o minutos después – como ocurrió en este caso – por lo que la imputación del retraso en el traslado de la víctima al servicio de urgencia no permite construir una presunción de que aquel habría salvado su vida si la atención médica se hubiese prestado con anterioridad, ya que los daños causados por el proyectil en su cráneo y cerebro eran del tal magnitud – según el informe de autopsia del Servicio Médico Legal - que de seguro la muerte le habría llegado de igual forma.

En subsidio de las excepciones y defensas opuestas, sostiene que no procede acoger la demanda, ya que no se dan los requisitos de la responsabilidad extracontractual por el hecho del tercero dependiente. Qué No se trata en este caso de una forma de responsabilidad estricta o “vicaria”, puesto que semejante régimen solo aplica en caso de texto legal expreso. Que no es posible admitir o establecer que Carabineros de Chile, órgano del Estado, sea responsable por la muerte del ex Carabinero Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.), ya que no se dan en la especie los requisitos y condiciones que permitan formular un juicio de reproche serio y fundado respecto de la autoridad policial en su relación con el ex Carabinero Sepúlveda Jiménez, quien atentó contra su vida, y quien antes de su fallecimiento fue trasladado al servicio de urgencia más cercano tan pronto como se dispuso de acuerdo a las circunstancias del caso.

Luego, alega la que culpa es de la propia víctima. Que el Fisco de Chile no es el autor del daño. Que el Carabinero Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.) actuó con culpa al efectuar las conductas descritas, ya que éste es el autor directo de los hechos que ocasionaron su muerte y las lesiones de su compañero, y no puede existir responsabilidad de un tercero, y menos aún aceptarse que se intente trasladar su responsabilidad e intentar perseguirla en un tercero, argumentando para ello que aquel tercero debe responder por la omisión de sus dependientes.

En subsidio, invoca la eximente de responsabilidad establecida en los artículos 2320 inciso quinto y 2322 inciso segundo del Código Civil. Que en los hechos que se



Foja: 1

imputan al ex Carabinero Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.), nos encontramos sin lugar a dudas ante de una conducta de aquellas que no es posible prever o impedir por el superior, ni aun empleando un cuidado ordinario en el ejercicio de la autoridad competente.

En cuanto al daño moral, indica que para el improbable evento de acogerse, contra toda razón, la demanda de autos, deberá en todo caso fijarse monto moderado, acorde al mérito del proceso y a los criterios reiteradamente sustentados por la Jurisprudencia en cuanto a proporcionalidad y razonabilidad, rebajando considerablemente el monto de la demanda a una cantidad equitativa, razonable y justa.

Finalmente reclama la improcedencia de intereses y reajustes, por cuanto mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada que condene al Fisco, ninguna obligación tiene su representada de indemnizar, y por tanto ninguna suma existe que deba reajustarse ni generar intereses. Que los intereses demandados sólo podría tener por finalidad resarcir al demandante del retardo o mora en el cumplimiento o pago de una obligación cierta y líquida o liquidable. Concluye que los reajustes e intereses sólo se devengarían desde que la sentencia condenatoria quedara firme o ejecutoriada y su representado incurriera en mora.

Mediante presentación de folio 17, la demandante evacuó la réplica, solicitando que éstas sean desestimadas en todas sus partes.

Plantea que respecto de los hechos que no es efectivo que doña Francisca Díaz Lizama, solo girara su cuerpo hacia la oficina del Suboficial interno, sino que abandonó la sección de carga y descarga, dejando a los funcionarios sin supervisión inmediata. Que además, no es efectivo que los funcionarios de Carabineros hayan asistido en forma inmediata al Ex Carabinero Héctor Sepúlveda, ya que como consta de diversas declaraciones tanto en Sumario interno como en la Fiscalía Militar, estuvo largo minutos sin asistencia, hasta que fue llevado al Hospital Fach, ingresando a Urgencia a las 07:24 horas, esto es, 12 minutos después que el Carabinero Catalán.

Respecto a la responsabilidad, reitera que estamos frente a una falta de servicio. Que por estar los funcionarios sin supervisión inmediata, se produce el accidente que lesiona al Carabinero Catalán y al atenderlo a él se deja sin atención por largos minutos al Carabinero Sepúlveda, quien tenía una lesión de mayor gravedad que la del Carabinero Catalán, de riesgo vital. Que la falta de auxilio al Carabinero Sepúlveda constituye falta de servicio, ya que existió omisión en el actuar de los funcionarios de Carabineros, dejándolo sin atención por largos minutos y cuando al fin reaccionaron, ya era demasiado tarde.

En cuanto a la prescripción alegada, se remite a lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 19.880, precisando que existieron dos acciones para investigar las causas del fallecimiento del Carabinero Sepúlveda, por lo que a acción no se encontraría prescrita:



Foja: 1

a) Sumario Administrativo que concluye con el dictamen N° 05867/2014/3/ de fecha 23 de diciembre de 2016.

b) Causa Cuarta Fiscalía Militar rol 31.953-14, seguida ante 2° Juzgado Militar, en la cual se dictó sentencia el 02 de octubre de 2017, fallo confirmado por la Corte marcial por Resolución de fecha 07 de Febrero de 2018.

Respecto a la alegación que no corresponde hacer efectiva la responsabilidad del Estado por “falta de servicio” por tratarse de acción suicida del Ex Carabinero Sepúlveda Jiménez, reitera que la razón por la cual se ha interpuesto esta demanda es por la falta de asistencia al carabinero Sepúlveda, durante largos minutos, siendo su ingreso tardío la centro asistencial la causa de su fallecimiento, es justamente esta la razón de alegar falta de servicio.

En cuanto a la relación de causalidad, sostiene que esta es clara ya que si lo hubiesen trasladado al Hospital apenas recibió el impacto de la bala, el Carabinero Sepúlveda hubiese sobrevivido al disparo recibido.

Lo mismo señala en cuanto a la ausencia de culpa de parte de la demandada.

Asevera que no puede aplicarse la exención de responsabilidad establecida en el artículo 2322 del Código Civil, ya que se refiere a los criados y sirvientes, situación que no se da en este caso, ya que se trata de Funcionarios de Carabineros de Chile, que no tienen tal carácter ni les rige tal legislación.

A folio 19, la demandada Fisco de Chile/Consejo de Defensa del Estado evacuó la **dúplica** ratificó todo lo expuesto en la contestación a la demanda y solicitó el rechazo de la misma, con costas.

Hace presente que el escrito de réplica reitera las argumentaciones señaladas en la demanda sin aportar antecedentes nuevos a la discusión de autos, salvo lo que dice con la suspensión del plazo de prescripción extintiva de la acción impetrada, respecto de la cual otorga una argumentación que no tiene asidero en nuestra legislación, ya que la Ley N° 19.880 se refiere a la emisión de actos administrativos, y su procedimiento de reclamación administrativa, suspendiendo el plazo de prescripción de la acción destinada a revisar dicho acto administrativo, y no a la acción indemnizatoria establecida en el artículo 2314 del Código Civil.

Indica que la suspensión del plazo de prescripción a que alude la demandante, se refiere en primer lugar, a aquella acción para impugnar el acto administrativo, en este caso podría ser la decisión del sumario administrativo, y no a la acción indemnizatoria que persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que el fundamento de la acción deducida en autos sería la “falta de servicio” de Carabineros de Chile en la asistencia médica otorgada a la víctima, sostenida en los artículos 1°, 3°, 4° y 42 de la Ley 18.575.



Foja: 1

Sostiene que la instrucción de una investigación de orden criminal por el Segundo Juzgado Militar de Santiago, tampoco produjo la interrupción del plazo de prescripción extintivo del artículo 2332 del Código Civil. Que los demandantes de autos no impetraron medida alguna en el juicio seguido ante el Juzgado Militar que anunciara que perseguirían la responsabilidad civil del Fisco por estos hechos, es así que ellos no hicieron reserva de acciones civiles, ni solicitaron medidas precautorias, ni intentaron demandas indemnizatorias, por lo que la investigación criminal por si sola no puede producir el efecto de interrumpir el plazo de prescripción extintivo de una acción judicial indemnizatoria, sino que requiere una manifestación de voluntad de los actores, que en este caso, no se hizo.

Concluye que en el caso de autos no existió interrupción civil ni natural de la obligación por parte del deudor, el Fisco en este caso, porque no se reconoció la obligación ni se notificó demanda judicial que reclamase el pago de dicha obligación.

Mediante resolución de folio 22 y fecha 21 de febrero de 2019, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales ésta habría de recaer, los siguientes:

1. Causa basal del deceso del ex Carabinero don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez, ocurrido el 6 de junio de 2014. Hechos y circunstancias en que se produjo.
2. Posibilidades reales de sobrevivencia del Sr. Sepúlveda Jiménez, si se le hubiera dado la atención de los servicios que indica el actor.
3. Estado en que ingresó al Servicio de Urgencias del Hospital FACH y protocolo a que fuere sometido.
4. Relación de causalidad entre la conducta negligente que se le imputa a la demandada y el daño que habría sufrido don Héctor Sepúlveda Jiménez.
5. Efectividad de haber transcurrido los plazos para estimar que se encuentra prescrita la acción.
6. Efectividad de encontrarse la parte demandada exenta de responsabilidad por las acciones ejercida de modo impropio por don Héctor Eduardo Sepúlveda.
7. Perjuicios causados. Naturaleza y monto.

Mediante resolución de folio 108 y fecha 18 de diciembre de 2019, se citó a las partes a oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, a folio 1, comparece doña Lorna Mulchi Echeverría, Abogado, en representación convencional de don Jorge Eduardo Sepúlveda Vergara y de doña Jacqueline Ivette Jiménez Martínez, e interpone demanda civil de indemnización de perjuicios extracontractuales en juicio de hacienda en contra de Carabineros de Chile,



Foja: 1

representada por su Director General don Hermes Soto Isla, y en forma solidaria en contra del Fisco de Chile, representado judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado, ambos representados por su Presidente doña María Eugenia Manaud Tapia.

Funda su demanda en los antecedentes de hecho y de derecho ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, los que se dan por reproducidos para todos los efectos legales.

**SEGUNDO:** Que, a folio 11, la demandada Fisco de Chile/Consejo de Defensa del Estado (Fisco de Chile) contestó la demanda solicitando su rechazo con costas. Funda su contestación en los antecedentes de hecho y de derecho ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, los que se dan por reproducidos para todos los efectos legales.

**TERCERO:** Que, mediante presentación de folio 17, la demandante evacuó la réplica, solicitando tener por reproducido íntegramente lo expuesto en su demanda y señalando que no es efectivo lo aseverado por Fisco de Chile en su contestación.

A folio 19, la demandada Fisco de Chile/Consejo de Defensa del Estado evacuó la dúplica ratificó todo lo expuesto en la contestación a la demanda y solicitó el rechazo de la misma, con costas.

Que los antecedentes de hecho y de derecho de sus escritos de réplica y dúplica, ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, los que se dan por reproducidos para todos los efectos legales.

**CUARTO:** Que, mediante resolución de folio 22 y fecha 21 de febrero de 2019, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales ésta habría de recaer, los ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

**QUINTO:** Que atendida la naturaleza jurídica de la acción incoada en autos, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde a la demandante probar los fundamentos fácticos o presupuestos de la acción incoada.

Probada por una parte la existencia de una situación jurídica cualquiera, es permitido a la contraria destruirla y reemplazarla por otra; pero la parte que pretende realizar este cambio debe establecer la modificación que alega. De esta forma, a quien haga una afirmación en juicio, incluso el demandado cuando niega -siempre que en esta negativa vaya envuelta una afirmación- le incumbe la prueba de los hechos en que se basa sus alegaciones.

**SEXTO:** Que en orden a acreditar sus asertos, la parte demandante rindió la siguiente prueba instrumental:



Foja: 1

1.- Informe psicológico de doña Jacqueline Jiménez Martínez, emitido por don Sergio Beltrán Provoste, psicólogo del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), del Servicio de Salud Araucanía Norte, con fecha 29 de marzo de 2018.

2.- Certificado de atención emitido por doña Andrea Rebolledo Quintana Asistente Social y encargada del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), del Servicio de Salud Araucanía Norte, con fecha 27 de Abril de 2018.

3.- Epicrisis de intervención de don Jorge Sepúlveda Vergara, N° de Ficha 153543, fecha de ingreso 25 de enero 2016 y egreso 04 de febrero 2016.

4.- Informe doctor Rodrigo Montes Forno, jefe equipo cabeza y cuello del Instituto nacional del Cáncer, emitido con fecha 22 de septiembre de 2016.

5.- Informe Tomográfico de don Jorge Sepúlveda Vergara, emitido por el Doctor Raúl Collado Hung, médico radiólogo Hospital de Angol, con fecha 05 de marzo de 2018.

6.- Respuesta de fecha 30 de Octubre de 2018 a la solicitud N° AD009W0043325 ingresada al portal Información Pública con fecha 02 de octubre de 2018.

7.- Respuesta de fecha 20 de Junio de 2019 a la solicitud N° AD009W0046619 ingresada al portal Información Pública con fecha 30 junio 2019.

8.- Fallo Corte Suprema Rol 6.900-2015.

9.- Fallo Corte Suprema 58.985-2016, con sentencia reemplazo.

10.- Fallo Corte Suprema 22.878-2015.

11.- Reglamento de Servicio para Jefes y Oficiales de Orden y Seguridad de Carabineros.

12.- Declaraciones prestadas ante Policía de Investigaciones de Chile, Brigada de Homicidios y acompañada en causa rol 1000-2014 de la Cuarta Fiscalía Militar de Santiago de los siguientes funcionarios de Carabineros:

a) Subteniente Francisca Andrea Díaz Lizama.

b) Sargento Segundo Lorena Victoria Villalón Vásquez.

c) Funcionario Felipe Alfredo Kunstmann Kunstmann.

d) Funcionario Yonathan Rodrigo Marín Saldivia.

e) Sargento Segundo Jaime Andrés Aguilera Beecher.

f) Funcionario Gonzalo Alejandro Bañares Ruiz.

g) Funcionario Manuel Antonio Palma García.



Foja: 1

13.- Fichas ingreso Urgencia del Carabineros Héctor Sepúlveda Jiménez y Julio Francisco Catalán Sepúlveda.

14.- Sentencias de la Excelentísima Corte Suprema rol 101.769-2016, rol 47.936-2016 y Rol 1561-2015.

**SEPTIMO:** Que adicionalmente, la demandante rindió prueba testimonial, consistente en la declaración de los siguientes testigos, debidamente juramentados:

1. En audiencia de fecha 21 de junio de 2019 y folio 65, de doña Andrea Jacqueline Albarran Escobar, dueña de casa, domiciliada en Lanalhue 801, Comuna de Angol.

2.- En audiencia de fecha 21 de junio de 2019 y folio 65, de doña Paola Johanna Cerda Muñoz, dueña de casa, domiciliada en Bremen 0609, Población Alemania, Comuna de Angol.

3.- En audiencia de fecha 21 de junio de 2019 y folio 65, de doña Roberto Antonio Díaz Espinoza, técnico, domiciliado en Adrián Salvo 0388, Comuna de Angol.

**OCTAVO:** Que asimismo, la demandante solicitó a folio 1 se oficiara:

1.- Al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) del Servicio de Salud Araucanía Norte, a objeto que remita copia de la ficha clínica del tratamiento psicológico y psiquiátrico de doña Jacqueline Ivette Jiménez Martínez, y de don Jorge Sepúlveda.

2.- Al Instituto Nacional del Cáncer a objeto que remita ficha clínica N° 153543 de don Jorge Sepúlveda Vergara, que da cuenta de su operación y tratamiento.

Que mediante resolución de folio 36 y fecha 19 de junio de 2019 se dio lugar a la solicitud de oficio dirigidos al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) del Servicio de Salud Araucanía Norte y al Instituto Nacional del Cáncer.

Que la respuesta al oficio dirigido al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) del Servicio de Salud Araucanía Norte fue agregada a folio 55.

Que la respuesta al oficio dirigido al Instituto Nacional del Cáncer fue agregada a folio 57.

**NOVENO:** Que mediante presentación de folio 32, la demandante solicitó se tuviera a la vista:

1.- Sumario Administrativo ROL 05867/2014/1 de la Fiscalía Administrativa de Carabineros de Chile Prefectura Santiago Andes, que da cuenta de la investigación sumaria seguida por dicha entidad por el fallecimiento del Héctor Sepúlveda Jiménez.



Foja: 1

2.- Causa seguida Segundo Juzgado Militar de Santiago, ROL 1000-2014, contra NN Carabineros 17 Comisaria de Las Condes, que investigo el fallecimiento de don Héctor Sepúlveda Jiménez.

Que mediante resolución de folio 36 y fecha 19 de junio de 2019 se ordenó oficiar a la Fiscalía Administrativa de Carabineros de Chile Prefectura Santiago Andes y al Segundo Juzgado Militar de Santiago a fin de que se remitieran los expedientes singularizados.

Que la respuesta al oficio dirigido a la Fiscalía Administrativa de Carabineros de Chile Prefectura Santiago Andes fue agregada a folio 70.

Que la respuesta al oficio dirigido al Segundo Juzgado Militar de Santiago fue agregada a folio 95, mientras que el expediente ROL 1000-2014, fue agregado a folios 98, 99, 100, 101, 102 y 104.

**DÉCIMO:** Que la demandada Fisco de Chile/Consejo de Defensa del Estado, allegó al proceso la siguiente prueba documental:

1.- Liquidaciones de remuneraciones del Carabinero Héctor Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.).

2.- Hoja de Vida del Carabinero Héctor Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.).

3.- Copia del Dictamen N° 5867/2014 de 23.12.2016, el cual se efectuó en el Sumario Administrativo realizado por la muerte del Carabinero (Q.E.P.D.) Héctor Sepúlveda Jiménez.

4.- Copia de la Ampliación del Dictamen N° 5867/2014 de 27.04.2017.

**UNDECIMO:** Que adicionalmente, la demandada rindió prueba testimonial, consistente en la declaración de los siguientes testigos, debidamente juramentados:

1.- En audiencia de fecha 21 de junio de 2019 y folio 41, de don Williams Adrian Sandoval Carrasco, Cabo 2° de Carabineros, domiciliado en Las Tranqueras N° 840, Las Condes, Santiago.

2.- En audiencia de fecha 21 de junio de 2019 y folio 41, de don Yonatan Rodrigo Marín Saldivia, Cabo 2° de Carabineros, domiciliado en Las Tranqueras N° 840, Las Condes, Santiago.

3.- En audiencia de fecha 21 de junio de 2019 y folio 41, de don Gonzalo Alejandro Bañares Ruiz, Cabo 2° de Carabineros, domiciliado en Las Tranqueras N° 840, Las Condes, Santiago.

**DUODECIMO:** Que son hechos de la causa, por no haber sido controvertidos o por encontrarse acreditados en el proceso, los siguientes:





Foja: 1

1.- Que el día 06 de junio de 2014, entre las 06:45 y 07:00 horas, en la zona de carga y descarga de armamentos de la 17° Comisaría de Las Condes, el Carabinero don Julio Francisco Catalán Sepúlveda, recibió una herida de arma de fuego, presuntamente proveniente del revolver fiscal, marca Taurus, calibre 38, que manipulaba en dicho instante el Carabinero don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez, de dicha dotación, y parte del servicio de transito de colegios, a cargo en ese momento de la Subteniente de Carabineros doña Francisca Andrea Díaz Lizama. Segundos después y antes de transcurrir un minuto, el Carabinero don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez procedió a dispararse en la cabeza.

Posteriormente, don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez fue trasladado al hospital de la Fach (el cual se encuentra a 5 cuadras de la comisaría) por el sargento 2° Carlos Guillermo Quelin Obreque en vehículo policial patente RP-3084. A las 07:24 horas, don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez ingreso al Hospital de la FACH, con herida de arma de fuego y en coma profundo, lugar donde se le aplicaron maniobras de RCP. A las 07:35 falleció don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez debido a un traumatismo encefalocraneano por proyectil balístico de tipo suicida (según la autopsia n°1729.14 practicada por el Servicio Médico Legal).

2.- Existencia de Sumario Administrativo rol 05867/2014/1 de la Fiscalía Administrativa de Carabineros de Chile Prefectura Santiago Andes, iniciado con la finalidad de determinar fehacientemente las causas y circunstancias en que ocurrieron los siguientes hechos, estableciendo y determinando los beneficios y/o responsabilidades administrativas si existieren: lesión del Cabo 2° Julio Francisco Catalán Sepúlveda, quien fuera de dotación de la 17ª Comisaria Carabineros Las Condes; y el fallecimiento del Ex-Carabinero Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez, quien fuera de dotación de la 17ª Comisaria de Carabineros "Las Condes", hechos ocurridos el día 06 de junio de 2014.

Que el sumario se cerró el día 06 de agosto de 2016. Que el día 10 de agosto de 2016 se decretó la segunda ampliación de vista fiscal sumario rol 05867/2014/3 por don Juan Leonardo Vivar Muñoz, Teniente de Carabineros y fiscal a cargo, se determinó, entre otros, que no se ha establecido responsabilidades administrativas para ningún miembro de la Institución en los hechos investigados.

Que mediante dictamen n° 05867/2014/3 de fecha 23 de diciembre de 2016, suscrito por Eduardo E. Ramos Machuca, Coronel de Carabineros de la Prefectura de Santiago Andes, se estableció, entre otros, que la lesión sufrida por el Ex-Carabinero Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.), consistente en "traumatismo encefalocraneano por proyectil balístico", y a raíz de las cuales, siendo las 07:35 horas del día 06 de junio de 2014, el señalado Ex P.N.I. falleció, no ocurrió en un acto propio de servicio.



Foja: 1

3.- Existencia de causa rol 1000-2014 seguida Segundo Juzgado Militar de Santiago, contra NN Carabineros 17° Comisaria de Las Condes, que investigo el fallecimiento de don Héctor Sepúlveda Jiménez.

Que por resolución de fecha 02 de octubre de 2017 y fojas 1.076, el Segundo Juzgado Militar resolvió el sobreseimiento total y definitivo de dicha causa, tanto respecto de la muerte del Carabinero don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez, como del cuasidelito de lesiones graves del Carabinero don Julio Francisco Catalán Sepúlveda.

Que por resolución de fecha 07 de febrero de 2018, en causa rol ingreso 883-2017 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones Marcial, se confirmo la resolución apelada de fecha 02 de octubre de 2017 escrita a fojas 1.076 en causa rol 1000-2014 del Segundo Juzgado Militar de Santiago.

**DECIMO TERCERO:** Que lo pretendido por los demandantes es que se les indemnice el daño moral, que avalúan en la suma de \$300.000.000 respecto de cada uno, sufrido a causa del fallecimiento del carabinero don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez, quien el día 06 de junio de 2014, aproximadamente a las 6:50 A.M, en la zona de carga y descarga de armamento de la 17° Comisaria de Carabineros de Chile de Las Condes, fue víctima de un disparo que le produjo la muerte (ese mismo día, a las 07:35 horas, en el Hospital de la FACH). Fundan la responsabilidad de las demandadas en una falta de servicio, originada en la ausencia de supervisión inmediata al momento de ocurrir el disparo que le causó la muerte y en el retardo en la asistencia médica que se le brindo al fallecido.

**DECIMO CUARTO:** Que el artículo 6 Constitución Política de la República estipula que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la Republica.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generara´ las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

A su vez, el artículo 7 de la carta fundamental, preceptúa que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originara´ las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.



Foja: 1

Por su parte, el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

**DECIMO QUINTO:** Que de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Bases de la Administración del Estado N° 18.575 (refundida, coordinada y sistematizada mediante DFL 1-19.653-2001), “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiese ocasionado”.

Que el inciso 2° del artículo 3 de la Ley de Bases consagra que “La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica, en conformidad con la Constitución Política y las leyes”. Adiciona el inciso 1° del artículo 5 que, “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”.

Por su parte, el artículo 42 del referido texto legal dispone: “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”.

**DECIMO SEXTO:** No obstante lo anotado, ha de tenerse presente que el artículo 21 inciso 2° de la Ley de Bases de la Administración del Estado establece que “Las normas del presente Título no se aplicarán a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública... órganos que se regirán por las normas constitucionales pertinentes y por sus respectivas leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado, según corresponda.”. Así, el sistema de responsabilidad establecido en el Título II de la Ley de Bases no le resulta aplicable a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, debiendo acudir a sus respectivas leyes orgánicas, las cuales no contienen normas que regulen la responsabilidad de dichas instituciones ante la ciudadanía.

Luego, nos encontraríamos frente a una laguna jurídica, toda vez que, y en palabras del profesor Jorge Bermúdez Soto, para el caso en comento “...el ordenamiento jurídico carece de toda solución normativa” (BERMUDEZ SOTO, Jorge. Las relaciones entre el Derecho administrativo y el Derecho común. Abeledo Perrot- Thomson Reuters. Santiago de Chile, 2012. Página 9). Según Karl Larenz habrían lagunas en el derecho cuando “La ley deja de regular legalmente todo un sector que precisa una regulación o no



Foja: 1

contiene un instituto jurídico que debía contener atendiendo una necesidad imprescindible del tráfico o a un principio jurídico afirmado por la conciencia jurídica en general” (Larenz, Karl. Metodología de la ciencia del Derecho, Ed. Ariel Derecho, Barcelona, 1994, página 368).

Verificado lo anterior, cabe preguntarse: como integrar dicha laguna, y en definitiva, cual es el derecho aplicable.

Respecto de cómo integrar dicha laguna, ha de señalarse que mientras en otras legislaciones se le faculta al intérprete acudir al derecho supletorio, a la interpretación extensiva, a la aplicación analógica, a la costumbre o a los principios del derecho; no existe en cambio en nuestro sistema jurídico norma que zanje la integración de lagunas jurídicas. El proyecto del Código Civil del año 1853, en su artículo 4, contenía una solución explícita al problema, señalando que “En materias civiles, a falta de ley escrita o de costumbre que tenga fuerza de ley, fallará el juez conforme a lo que dispongan las leyes para objetos análogos y a falta de éstas, conforme a los principios generales del Derecho y de equidad natural”. La única referencia vigente a la integración de las lagunas jurídica es el artículo 170 número 5 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que “Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán:... n° 5 la enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo...”.

La Excelentísima Corte Suprema ha optado por aplicar la equidad ante casos de lagunas legales, fundándose mayoritariamente en el citado artículo 170 número 5 del Código de Procedimiento Civil, y ocasionalmente en el artículo 24 del Código Civil, en éste último caso aplicando adicionalmente, según preceptúa dicha norma, el espíritu general de la legislación (ver Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales. Abril 1943, t. 40, sección 1, página 516). Si bien algunos tribunales de primera instancia, como respuesta a una laguna legal, han efectuado una aplicación analógica fundada en la equidad, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso ha opinado que ante soluciones diversas proporcionadas por la aplicación analógica y la equidad, ha de optarse por ésta última en virtud de lo preceptuado por el artículo 170 número 5 del Código de Procedimiento Civil.

Luego, aparece medianamente claro que es la equidad la llamada a integrar lagunas jurídicas, y de paso servir como un mecanismo concreto del principio de inexcusabilidad consagrado en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, equidad que puede ser entendida como “...el sentido natural de lo justo, el sentimiento natural de justicia del juez.” (Los Principios Generales del derecho en el Código Civil Chileno y en el Código Español. Eduardo Niño Tejada. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N° 7. Año1983).



Foja: 1

**DECIMO SEPTIMO:** Que, para dar solución en concreto a la interrogante respecto a que derecho resulta aplicable, el profesor de derecho administrativo y ex ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Pedro Pierry Arrau plantea las siguientes soluciones:

A) Aplicar, a pesar de lo prescrito por el artículo 21, el artículo 44 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, a partir de lo que dispone el artículo 4 de la misma ley.

B) Aplicar el artículo 2320 del Código Civil, exigiendo con ello, se identifique al funcionario responsable, y se acredite su culpa o dolo.

C) Aplicar directamente los artículos, 38 de la Constitución, y 4 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, 18.575.

D) Aplicación literal del artículo 4 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, lo que importaría acoger la idea de responsabilidad objetiva, pero sólo en los casos en que se trate de órganos del Estado actuando en el ejercicio de sus funciones, hipótesis en la que deberían excluirse los daños ocasionados cuando el funcionario actúe fuera de su ámbito de competencia.

E) Aplicación de la institución de la “Falta de Servicio” a partir del artículo 2314 y también del artículo 2329, ambos del Código Civil, el que debiera considerarse “El Derecho común en la materia” (Responsabilidad extracontractual del estado por los delitos cometidos por sus funcionarios. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N° 7, año 1983).

De todas la planteadas, el autor referido se inclina por ésta última solución, la cual tuvo ocasión de plasmar en reiterados fallos dictados en ejercicio como ministro de la Excelentísima Corte Suprema, entre ellos la sentencia definitiva de fecha 30 de julio de 2009 en causa caratulada “Seguel con Fisco de Chile”, ingreso rol corte n° 371-2008, al cual se hará referencia en el considerando que sigue.

**DECIMO OCTAVO:** Que a nivel jurisprudencial, antes de la publicación de la Ley 18.575 de Bases de la Administración del Estado, el 5 de diciembre de 1986, e incluso varios años después de la entrada en vigor de dicha ley, se aplicó exclusivamente a la administración normas de derecho público. Dicha situación comenzó a cambiar con la dictación de la sentencia definitiva de fecha 15 de mayo de 2002 en causa ingreso rol corte n° 4753-2001 de la Excelentísima Corte Suprema, la cual hizo extensible reglas de prescripción civil a un caso de responsabilidad administrativa. Después, mediante sentencia definitiva de fecha 30 de julio de 2009 en causa caratulada “Seguel con Fisco de Chile”, ingreso rol corte n° 371-2008, la Excelentísima Corte Suprema estableció que cabe aceptar la aplicación en nuestro país a partir del artículo 2314 del Código Civil, de la noción de falta de servicio. Por su parte, el ministro Sergio Muñoz mediante voto de minoría (considerando 10) en causa caratulada “Palma Guerra Enzo con Fisco de Chile”, Rol 9510-2009 de la Excelentísima Corte Suprema entendió que igualmente se aplica el



Foja: 1

artículo 42 a las reparticiones excluidas en el inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Bases; e igualmente mediante un voto de minoría en sentencia de mayo de 2012 en causa caratulada “Segura Soto, Pablo con Fisco de Chile”, Rol 9718-2009 de la Excelentísima Corte Suprema, el individualizado ministro propuso rechazar la aplicación de reglas del Código Civil a la decisión de las causas en las que se reclama sean indemnizados perjuicios que hayan tenido su origen en acciones u omisiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, debido a que esta clase de responsabilidad tiene sus reglas especiales que varían siguiendo las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados. En apoyo a ésta última don Enrique Barros Burie reflexiona que “lo normal es que el Estado esté sujeto a distintos criterios de atribución de responsabilidad, que se hacen cargo de la diversidad de actividades y funciones asumida por las administraciones modernas” (Barros Bourie, Enrique. Tratado de responsabilidad extracontractual. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, años 2006 página 484).

Más adelante, la sentencia definitiva de fecha 24 de abril de 2017, pronunciada en causa rol ingreso corte N° 52.961-2016 de la Excelentísima Corte Suprema, propuso que el artículo 21 de la Ley de Bases sólo establece una restricción de aplicación a las Fuerzas Armadas y Carabineros, en cuanto a la organización, funcionamiento y carrera funcionaria, no resultando excluidos en cambio del régimen de responsabilidad previsto en el artículo 42, utilizando como argumento el principio prescrito en el artículo 4 de la citada ley. Sin embargo, mientras la sentencia citada rechaza toda aplicación de las reglas civiles a la responsabilidad del Estado, utiliza sin problemas el concepto de lucro cesante, aplicando así la distinción que se encuentra en el artículo 1.556 del Código Civil. De cualquier forma, ésta nueva interpretación no varió mayormente el resultado, por cuanto la doctrina establecida en “Seguel con Fisco de Chile”, también comulgaba la aplicación de la falta de servicio, aunque por vía Código Civil.

Salvo ésta última sentencia y la citada opinión minoritaria del ministro Muñoz, pareciera que la jurisprudencia mayoritaria se inclina por la aplicación del derecho común (Código Civil) a la situación señalada. Ello se ve reflejado, verbigracia, en las siguientes sentencias definitivas pronunciadas por la Excelentísima Corte Suprema: 25 de octubre de 2010, rol N° 6627-2008; 14 de enero de 2011, rol N° 7919-2008; 24 de marzo de 2011, rol N° 1760-2009; 27 de septiembre de 2012, rol N° 830-2010; 28 de marzo de 2013, rol N° 3844-2010; 15 de abril de 2014, rol N° 12530-2013; 13 de agosto de 2014, rol N° 13163-2013 y 7 de junio de 2016, rol N° 32262-2015.

Habida cuenta que, por un lado, la Administración del Estado se encuentra dotada de considerables prerrogativas y recursos, y su actuar se adscribe a una finalidad específica de servicio a la ciudadanía, y que por otro, los particulares no tiene ni los recursos ni las prerrogativas ni las finalidades que detenta y persigue la Administración, esta magistrado es de la opinión que resulta más adecuada la aplicación de normas de derecho público a las relaciones entre privados y la administración pública, y en específico



Foja: 1

para regular las responsabilidades que le quepan a ésta por actuaciones que afecten a aquellos. Sin embargo, no puede soslayarse que ha sido la propia Ley de Bases la que en su artículo 21 inciso 2º ha excluido a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del sistema de responsabilidad consagrado en el Título II, en específico, en el artículo 42, efectuando una remisión expresa a sus respectivas leyes orgánicas, las cuales, como se mencionó, no regulan la responsabilidad que les caben a dichas instituciones ante los ciudadanos. Huelga en este punto afirmar que hace falta una regulación expresa e íntegra de la responsabilidad que le caben a los órganos exceptuados mediante el artículo 21 inciso 2º de la Ley de Bases, y que en sus respectivas leyes orgánicas carecen de normativa al respecto.

Que si bien tanto la Constitución Política de la República, en su artículo 38, como la Ley de Bases, en su artículo 4 (artículo que sí resulta aplicable a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública por cuanto se encuentra en el Título I de dicha Ley), consagran el principio de responsabilidad de los órganos del estado ante los ciudadanos, más allá de la Ley de Bases no se ha consagrado un sistema de responsabilidad de carácter general respecto de los órganos de la administración pública que pueda aplicarse al caso en comento. El sólo principio mencionado no basta para construir, aún mediante la equidad (al existir una laguna normativa), un sistema de responsabilidad de órganos de la administración pública como lo son las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, sistema que por supuesto y habida cuenta de la exclusión reseñada, habría de ser diverso a aquel consagrado en el título II de la Ley de Bases. Debido a ello, y a fin de no incurrir en una vulneración flagrante del artículo 21 inciso 2º de la ley de Bases (el cual, a esta magistrado le resulta claro y perentorio en cuanto a la restricción establecida), o en la nomogénesis de un sistema completo de responsabilidad (actividad impropia de ésta poder del estado), no resta sino efectuar una aplicación analógica del sistema de responsabilidad extracontractual previsto en el Código Civil, al constituir el derecho común y supletorio.

Dicha aplicación analógica, podría ser entendida como una aplicación directa de las normas de responsabilidad aquiliana prevista en el título XXXV del Libro IV del Código Civil, o como una aplicación de la responsabilidad por falta de servicio efectuada a partir de las normas prevista en el título XXXV del Libro IV del Código Civil, distinción que para efectos de la causa sublite, carece de importancia, como se verá mas adelante, por lo cual no se hará pronunciamiento al respecto.

Al respecto, don Hernán Corral Talciani ha sostenido que “Nada obsta a que la responsabilidad del Estado pueda determinarse por su especial factor de imputación: la falta de servicio y siguiendo sus leyes y principios especiales, pero que, en cuanto a los daños indemnizables, la relación de causalidad, la solidaridad de corresponsables, la culpa de la víctima o la extinción de la acción por prescripción el intérprete o juzgado utilice, en su calidad de Derecho común, a las reglas del título XXXV del libro IV del



Foja: 1

Código Civil.” (Responsabilidad de las Fuerzas Armadas: ¿Código Civil o Ley de Bases de la Administración del Estado? Publicado el 10 de mayo de 2017 en “El Mercurio Legal”).

**DECIMO NOVENO:** Prescribe el artículo 1437 del Código Sustantivo que “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad”.

Que la responsabilidad extracontractual o aquiliana responde a la idea de la producción de un daño a otra persona por haber transgredido el genérico deber de abstenerse de un comportamiento lesivo a los demás. Al efecto, el artículo 2314 del Código Civil, dispone: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.

Que son requisitos copulativos del estatuto de responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, además de la capacidad (que por constituirse en la regla general y no haberse alegado hipótesis de incapacidad alguna se da por concurrente): Una acción u omisión ilícita del agente; la culpa o dolo de su parte (elementos que se analizarán conjuntamente); el perjuicio o daño a la víctima; la relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido; y, la ausencia de una causal de exención de responsabilidad.

Que en a pesar de su naturaleza particular, el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que este constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

Que respecto de los dos primeros requisitos exigidos para la verificación de la responsabilidad atribuida, cabe mencionar que “es necesario que el daño provenga de un comportamiento objetivamente ilícito, contrario al ordenamiento jurídico, contrario a lo justo” (“Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual”, pág. 119, Editorial Jurídica de Chile, año 2003), y que la valoración de la licitud de este comportamiento puede fundarse ya sea en una infracción a un deber legal expreso, o en la transgresión del principio general de que no es lícito dañar sin causa justificada a otro. De ahí la íntima relación existente entre este elemento y la imputabilidad o reproche (culpa o dolo) del agente.

Cabe tener presente que el daño emergente puede ser definido como el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio de una persona a consecuencia del actuar negligente de otra, el que para ser indemnizable debe cumplir con los requisitos





Foja: 1

de ser actual, cierto y no hipotético, por lo que cabe al demandante de los perjuicios probarlo.

Por su parte, el lucro cesante, ha sido definido como la pérdida de la legítima ganancia esperada.

En cuanto al daño moral, la profesora Carmen Domínguez Hidalgo señala que el daño moral está “constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión a un interés moral por una (persona) que se encontraba obligado a respetarlo”. Asimismo, el autor don José Luis Diez Schwerter, indica, que para la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, “el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona”.

Que el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia. Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético.

**VIGESIMO:** Por otra parte, existe falta de servicio cuando un órgano del Estado obligado por la ley a proporcionar un determinado ha funcionado mal, el servicio no ha funcionado o el servicio ha funcionado tardíamente. Para que opere la responsabilidad por falta de servicio es necesaria la existencia a) de una falta de servicio, b) de un daño y c) una relación de causalidad entre ambos.

Luego, son requisitos de toda responsabilidad por falta de servicio: a) que exista una norma de derecho positivo que obligue al órgano a actuar dentro de la esfera de sus competencias públicas; b) que se acredite que éste no actuó o que lo hizo en forma inadecuada o insuficiente; c) que se pruebe la existencia de perjuicios; d) que exista un nexo de causalidad entre los perjuicios sufridos y la falta de servicio.

Al efecto, y como lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema, en fallo de 05 de octubre de 2012, Rol N° 1328-2009, “la falta de servicio es el factor de atribución general de la responsabilidad patrimonial de la Administración, vale decir, el fundamento jurídico en cuya virtud los costos de los daños sufridos por un particular son asumidos por aquella... Así, la “falta de servicio”, configura una presunción de culpa que opera por el solo hecho de que el servicio no funcione debiendo hacerlo, o lo haga imperfectamente o con retardo. [De este hecho se deduce la culpa de la Administración, debiendo ésta, y no el dañado, acreditar que se ha obrado con la diligencia y el cuidado debidos. Se trata, por ende, de una presunción simplemente legal, en todo equivalente a las presunciones establecidas en el artículo 2329 del Código Civil. Probablemente sea por esta razón por la que se ha pensado erradamente en un régimen de responsabilidad objetiva sin que exista norma que lo determine. Por consiguiente, la responsabilidad extracontractual del Estado



Foja: 1

se impone directamente y sobre la base de una presunción de culpa que puede desvanecerse siempre que se pruebe un caso de fortuito u otra causal de justificación”.

También en fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción de 11 de agosto de 2004, se dejó establecido “Que, la responsabilidad que se imputa a la entidad demandada sólo puede ser indagada a través de la noción o teoría de la “falta de servicio público” la que en término simples importa todo mal funcionamiento del servicio... Que existe consenso que hay falta de servicio en las siguientes situaciones: a) Cuando no ha funcionado, existiendo el deber funcional de actuar; b) Cuando el servicio ha funcionado, pero deficientemente, y c) Cuando ha funcionado, pero tardíamente...” (Alejandra Aguad Deik, Javier Barrientos Grandoñ, Leonor Etcheberry Court, Inígo de la Maza Gazmuri, Carlos Pizarro Wilson, “Jurisprudencia Civil Comentada”, Editorial Abeledo Perrot, Primera Edición, año 2011, página 130).

**VIGESIMO PRIMERO:** Que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales, y se encuentra tratada en el Código Civil, en los artículos 2492 y siguientes.

Que la prescripción se inserta en un sistema jurídico proteccional que tiene como objetivo principal el otorgar certeza y seguridad a las relaciones jurídicas que ligan a los sujetos de derecho y la debida tutela o protección de los mismos, instando en definitiva a que los partícipes de dichas relaciones no se hallen vinculadas en forma indefinida, provocando con ello incertidumbre y falta de consolidación de las diversas situaciones jurídicas.

Si bien el ordenamiento, por una parte otorga la protección al acreedor, facultando al sujeto activo para exigir de aquel que le garantice el ejercicio pacífico y en definitiva la eficacia de su derecho; protege a su vez al sujeto pasivo de la relación estableciendo con normas de orden público el real alcance y permanencia del deber que de esta relación emana.

La prescripción extintiva o liberatoria, permite la estabilidad de los derechos dando seguridad jurídica y, en definitiva se constituye en un castigo para el actor negligente que no hace valer sus derechos en el tiempo que fija la ley.

Tratase de una institución universal de orden público, puesto que cuando la ley estima que determinada relación jurídica amerita no extinguirse a través de la prescripción liberatoria, lo señala expresamente, como en la acción de reclamación de estado civil, la acción de partición, etc.

Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2514 del Código Civil, la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos, exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, agregando el inciso segundo del



Foja: 1

mismo artículo que dicho tiempo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible.

Que a su turno, el artículo 2493 de nuestro código sustantivo, prescribe que “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”.

Que de acuerdo al artículo 2332 del Código Civil, “Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto.”.

**VIGESIMO SEGUNDO:** Que la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, aplicable expresamente a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en virtud de su artículo 2, establece en el inciso 2° de su artículo 54 que “Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo.”.

Que la finalidad perseguida por el Sumario Administrativo rol 05867/2014/1 de la Fiscalía Administrativa de Carabineros de Chile Prefectura Santiago Andes fue determinar fehacientemente las causas y circunstancias, estableciendo y determinando los beneficios y/o responsabilidades administrativas si existieren, en que ocurrió la lesión del Cabo 2° Julio Francisco Catalán Sepúlveda y el fallecimiento del Ex-Carabinero Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez, hechos ocurridos el día 06 de junio de 2014, determinándose por dictamen n° 05867/2014/3 de fecha 23 de diciembre de 2016, que la lesión sufrida por el Ex-Carabinero Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez (Q.E.P.D.), a raíz de las cuales, el día 06 de junio de 2014, falleció, no ocurrieron en un acto propio de servicio.

Por su parte, el fin de la acción deducida en estos autos no es impugnar lo actuado en el Sumario Administrativo rol 05867/2014/1, y en definitiva lo decidido dictamen n° 05867/2014/3 de fecha 23 de diciembre de 2016, sino obtener una indemnización de perjuicios extracontractual, por falta de servicio de personal de carabineros constituida por la ausencia de supervisión inmediata al momento de ocurrir el disparo que le causó la muerte a don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez y en el retardo en la asistencia médica que se le brindó al fallecido.

Que la acción jurisdiccional a la cual hace referencia el artículo 54 de la Ley N° 19.880, cuyo plazo de prescripción se ve interrumpido una vez planteada la reclamación, es aquella destinada a revisar o impugnar el acto administrativo (en estos autos, el dictamen n° 05867/2014/3 de fecha 23 de diciembre de 2016 o cualquier otro dictamen o resolución pronunciada en Sumario Administrativo rol 05867/2014/1). Luego, no se puede entender que tal reclamo tuvo la virtud de interrumpir el plazo que tenían los demandantes para interponer la acción de indemnización de perjuicios en sede extracontractual que



Foja: 1

intentan por cuanto se trata de una acción de naturaleza diversa, con una finalidad diversa y fundada en normas de carácter igualmente diverso. Algo totalmente diferente ocurre, por ejemplo, en las causas de reclamo judicial de multa administrativa de competencia de estos tribunales civiles, en las cuales se ataca directamente la resolución administrativa que fija una multa, a fin de que justamente esta sea dejada sin efecto o rebajada.

Que lo actuado en la causa Rol 1000-2014 seguida Segundo Juzgado Militar de Santiago, tampoco cumple los requisitos del inciso 2º de su artículo 54, por cuanto lo obrado y decidido por el Segundo Juzgado Militar de Santiago constituye un acto jurisdiccional y no un procedimiento de carácter administrativo (artículo 5 inciso 3 del Código Orgánico de Tribunales).

**VIGESIMO TERCERO:** Que resulta un hecho no discutido, y además probado en esta causa, que la muerte de don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez se produjo el día 06 de junio de 2014, fecha en la cual se habría igualmente perpetrado la ausencia de supervisión inmediata y el retardo en la asistencia médica en los cuales se funda la demanda.

Que de otra parte, según consta en estos autos a folio 6 y 7, las demandas fueron notificadas el día 25 de junio del año 2018.

Que así, al contabilizar los plazos desde la perpetración del acto, ocurrida el día 06 de junio de 2014 y hasta la notificación de la demanda a los demandados, ocurrida el 25 de junio de 2018, se puede constatar que antes de éste último hecho transcurrió íntegramente el plazo de prescripción extintiva establecido en el artículo 2332 del Código Civil, por lo cual cabe declarar la prescripción de la acción incoada, debiendo consecuentemente rechazarse la demanda.

**VIGESIMO CUARTO:** Que a mayor abundamiento, y aún bajo el supuesto de que la acción hubiera sido deducida y notificada antes de cumplirse el plazo de prescripción, lo cierto es que igualmente cabe el rechazo de la demanda por cuanto no se acreditó, ya sea la acción u omisión dolosa o culpable (bajo el entendido de una responsabilidad meramente extracontracutal), ya sea que administración no actuó o que lo hizo en forma inadecuada o insuficiente (bajo el entendido de una responsabilidad por falta de servicio), de acuerdo a las consideraciones que a continuación se indican.

Que según señala el libelo pretensor, el daño moral sufrido por los demandantes proviene del fallecimiento de su hijo don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez. Que por otro lado, los hechos imputados a los demandados son, como se ha dicho, la ausencia de supervisión inmediata al momento de ocurrir el disparo que le causó la muerte a don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez y en el retardo en la asistencia médica que se le brindó al fallecido. Independiente de su cuantificación, lo cierto es que el daño moral producido por la muerte de un hijo sí puede estimarse como un daño evidente que no requiere demostración como estiman las demandantes; mas debía de probarse en



Foja: 1

cambio, la relación causal entre la actuación que se le imputa a los demandados (la ausencia de supervisión inmediata y retardo en la asistencia médica de don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez) y el hecho que produjo el daño alegado por los demandantes (fallecimiento de don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez), o dicho de otro modo, era carga de las demandantes demostrar que la muerte de don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez se produjo debido precisamente a la falta de supervisión inmediata al momento en que se produjo el disparo que provocó su muerte y/o que luego de haber recibido el disparo, la muerte de don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez ocurrió ciertamente debido al retardo en la asistencia médica. En éste punto ha de considerarse que la interlocutoria de prueba, fijó entre otros, como hechos sobre los cuales habría de recaer la prueba, siendo de cargo de las demandantes su acreditación: “2) Posibilidades reales de sobrevivencia del Sr. Sepúlveda Jiménez, si se le hubiera dado la atención de los servicios que indica el actor”; y “4) Relación de causalidad entre la conducta negligente que se le imputa a la demandada y el daño que habría sufrido don Héctor Sepúlveda Jiménez”.

Respecto del retardo en la asistencia médica las demandantes no aportaron prueba alguna que hiciera concluir a éste tribunal que de no mediar dicho retardo, el resultado de muerte no se habría producido. Por el contrario, existen antecedentes que hacen concluir que aún de no haber existido retardo alguno en la asistencia médica, el resultado muerte de don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez a causa del disparo recibido se hubiera producido de igual forma. En ése sentido, la ampliación de autopsia n° 1729/14 de fecha 13 de abril de 2015, suscrita por Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez, médico legista, la cual consta a fojas 530 de la causa rol 1000-2014 seguida Segundo Juzgado Militar de Santiago, consignó que “... el traumatismo Encefalocraneano que presenta el occiso, y la trayectoria balística laceran las arterias de la base de Encéfalo y además comprometen núcleos de la base y pedículo cerebral derecho, lesiones incompatibles con la vida, por lo que aún a pesar de contar con auxilio el individuo hubiese fallecido”.

Respecto de la falta de supervisión inmediata, ha de señalarse que se desprende de la prueba allegada a éstos autos (tanto la declaración de don Williams Adrian Sandoval Carrasco, de Yonathan Rodrigo Marin Saldivia, de Gonzalo Alejandro Bañares Ruiz como los antecedentes que constan en el Sumario Administrativo rol 05867/2014/1 de la Fiscalía Administrativa de Carabineros de Chile Prefectura Santiago Andes y en la causa rol 1000-2014 seguida Segundo Juzgado Militar de Santiago), que el día en que ocurrieron los hechos la Subteniente de Carabineros doña Francisca Andrea Díaz Lizama estaba a cargo el personal de carabineros del servicio de transito de colegios de la 17° Comisaria de Carabineros (en el cual se desempeñaba don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez), quien se encontraba en la zona de carga y descarga de armamentos al momento en que ocurrió el disparo que impactó a don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez. Que adicionalmente, se tuvo por acreditado que la muerte don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez, tuvo como causa directa un disparo en la cabeza que él mismo



Foja: 1

efectuó. Que no constan en estos autos la existencia de antecedentes que hubieran hecho prever por parte de sus superiores o compañeros de trabajo el actuar suicida de don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez. Que adicionalmente, dicho acto se produjo segundos después de que don Julio Francisco Catalán Sepúlveda recibiera un disparo, lo cual provocó que la atención de quienes estaban en la sala de zona de carga y descarga de la 17° Comisaria de Carabineros se enfocara naturalmente en éste carabinero. Que por lo demás, un acto suicida no se ajusta a lo esperable dentro de la prestación de servicios de un funcionario de carabineros, ni ciertamente podría ser calificado como un acto de servicio. Que las razones antes mencionadas hacen concluir a ésta magistrado que la falta de supervisión inmediata de don Héctor Eduardo Sepúlveda Jiménez tampoco fue causa de su muerte.

**VIGESIMO QUINTO:** Que en conformidad con lo razonado, habiéndose primeramente verificado los presupuestos de la prescripción alegada por la demandada, y luego, y a mayor abundamiento, habiéndose descartado la ocurrencia de uno de los presupuestos de la acción deducida de indemnización de perjuicios en contra de las demandadas, esto es, la falta de la administración, huelga a esta Magistratura, por resultar completamente inoficioso, pronunciarse sobre los demás presupuestos de la acción deducida, como asimismo, sobre la prueba rendida para acreditarlos. Por las mismas razones se omitirá el pronunciamiento respecto de los demás puntos de prueba.

Asimismo, con el objetivo de no incurrir en decisiones contradictorias, se omitirá el pronunciamiento sobre las excepciones interpuestas por la demandada, y sus peticiones subsidiarias, desde que su procedencia requería necesariamente que hubiesen concurrido todos los presupuestos fácticos de la responsabilidad que se demandada, lo que no ha ocurrido.

**VIGESIMO SEXTO:** Que la restante prueba rendida y los demás antecedentes del proceso, en nada alteran lo concluido precedentemente.

**VIGESIMO SEPTIMO:** Que conforme a lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, estimándose que tuvo motivo plausible para litigar, no se condenará en costas a las demandantes.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1702, 1706, 1712, 2284, 2314, 2317, 2329, 2332, 2492, 2493, 2514 y siguientes del Código Civil; artículos 138, 144, 160, 170, 253, 309, 342, 346, 384, 426 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 6, 7, 38 y siguientes de la Constitución Política de la República; artículos 3, 4, 5, 21, 42 y siguientes de la Ley de Bases de la Administración del Estado n° 18.575 (refundida, coordinada y sistematizada mediante DFL 1-19.653-2001); artículos 2, 54 y siguientes de la Ley 19.880; y artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, **se declara:**



C-15400-2018

Foja: 1

I.- Se rechaza la acción de indemnización de perjuicios incoada en lo principal de folio 1.

II.- Que cada parte soportará sus costas.

Rol N° **15.400-2018.**

Pronunciada por doña Karina Portugal Cuevas, Juez Suplente del Décimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintitrés de Julio de dos mil veinte**



